

Tlachinollan: 25 años

Luis Hernández Navarro

La Jornada

06 de agosto de 2019

Año tras año, desde el 6 de junio de 1994, fecha de su nacimiento, Tlachinollan ha tomado la radiografía de los derechos humanos en la Montaña de Guerrero y en el estado, con la precisión de un especialista. Explorar los 25 informes anuales que ha elaborado desde entonces (más de 6 mil 250 cuartillas) es como sumergirse en el voluminoso expediente de un enfermo terminal que, sorprendentemente, encuentra inspiración y fuerzas para enfrentar su mal.

La Montaña de Guerrero es una región de pésimos caminos mal comunicados, a la que es difícil llegar desde otros lugares de la entidad. En la mejor tradición del colonialismo interno, se construyó una magnífica vía rápida entre la Ciudad de México y Acapulco, emblema turístico del alemanismo, pero el resto de la red de caminos (salvo contadas excepciones) es precario y deficiente. Muchos se hicieron para sacar la madera, el café o la jamaica, pero no para comunicar a sus habitantes. A pesar de ello y de que su sede está en Tlapa, el centro de derechos humanos ha extendido su labor a casi todo el estado.

Guerrero ha vivido desde la década de los 60 del siglo pasado, luchas cíclicas por los derechos cívicos y contra el caciquismo y grandes movilizaciones gremiales (por la copra, el café o la madera) o magisteriales, universitarias y estudiantiles, a las que los gobiernos en turno han respondido, invariablemente, con una fuerte represión. La respuesta popular a la violencia gubernamental ha sido, en distintos momentos, la formación de grupos armados. Con nombres y rostros distintos, la *guerra sucia* y una especie de Estado de excepción permanente se han instalado en la entidad desde hace casi 60 años. Como lo muestra el asesinato de 10 integrantes del Concejo Indígena Popular-Emiliano Zapata (CIPO-EZ) en los últimos cinco meses, esta *guerra sucia* sigue.

Los 25 informes de Tlachinollan muestran la compleja dialéctica existente entre los procesos de autoorganización popular en el estado (en la Montaña y Costa Chica preponderantemente a cargo de pueblos originarios y afrodescendientes) y la represión gubernamental. La violencia oficial ha logrado contener, fracturar y (en algunos casos) extinguir la lucha, pero no ha podido arrancar de raíz la resistencia.

Guerrero es una entidad militarizada, sobre todo en las regiones de Montaña y Costa Chica. El Ejército ha sido responsable allí de varias masacres, desapariciones, torturas, intimidaciones,

detenciones arbitrarias y violación de mujeres. De la mano de los soldados, como parte de una guerra de contrainsurgencia, las instituciones de salud esterilizaron a hombres de comunidades en lucha.

A partir de febrero de 2009, este modelo represivo comenzó a modificarse. Con el secuestro y la *ejecución* de los indígenas Raúl Lucas Ponce y Manuel Ponce Rosas, la eliminación de los luchadores sociales pasó a ser obra ya no de integrantes de las fuerzas armadas, sino de sicarios del narcotráfico. Se replicó así el modelo que Ulises Ruiz echó a caminar en 2006, para enfrentar a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), en el que, de la mano, policías y criminales, pusieron en práctica caravanas de la muerte y asesinato selectivo de dirigentes. La interminable lista de líderes sociales guerrerenses ultimados por *narcoparamilitares* en los últimos 10 años, y que se mantiene durante la Cuarta Transformación, es una muestra de que estos crímenes son continuidad de una *guerra sucia* que no quiere decir su nombre.

Los 25 informes anuales de Tlachinollan son, también, testimonio vivo de la apuesta de un grupo de hombres y mujeres, encabezados por el antropólogo Abel Barrera, por conjurar la maldición del eterno retorno de los ciclos de resistencia-represión-insurgencia y militarización. El centro de derechos humanos ha buscado transformar la naturaleza de la confrontación político-social en la entidad a través de la promoción y defensa de los derechos humanos y de un esquema de intermediación nada neutral, que toma explícitamente partido por los de abajo.

Esta labor ha propiciado que los integrantes de Tlachinollan hayan sido acusados por militares, políticos y caciques de ser los articuladores de la inconformidad popular e, incluso, de ser el brazo civil de organizaciones armadas. Nada más alejado de la realidad. Por supuesto, Tlachi ha documentado y denunciado la militarización de la entidad. Ha llevado a tribunales internacionales los crímenes cometidos por el Estado mexicano. Pero su propósito ha sido el de, con y desde la gente, buscar darle salida pacífica y negociada a conflictos, y crear un marco para la solución de las controversias.

Hacia el futuro, los retos en la defensa de los derechos humanos son enormes. En su último informe, Tlachinollan advierte: Del nuevo gobierno depende que los pueblos indígenas se incorporen a esta Cuarta Transformación, siempre y cuando sean tomados en cuenta como sujetos de derecho y no como simples seres que son utilizados por los gobiernos para justificar su proyecto político, por encima de las demandas de justicia y trato igualitario. La historia que han escrito desde hace siglos está íntimamente vinculada con la defensa de su territorio y su organización autónoma. Lo han hecho en todo momento a costa de su vida. Más claro, imposible.

Twitter: [@lhan55](#)

Fuente: <https://www.jornada.com.mx/2019/08/06/opinion/014a2pol>

